



Prueba 1 mes por \$9.500

Ambiente

Amazonas

BIBO

Blog El Río

Home > Ambiente

Hace 1 hora

México, entre el acaparamiento de agua y la sequía

Un acueducto, tres embalses y falta de agua potable son testimonio de una historia que arrincona a Yaqui, una de las 69 poblaciones indígenas de México.

Emilio Godoy / @periodistagodoy





A pesar del inicio de la temporada lluviosa en mayo, más de la mitad del territorio mexicano presenta condiciones secas.

Si hay un pueblo que sabe de primera mano el significado de la injusticia hídrica ese es el Yaqui, una de las 69 poblaciones indígenas que habitan en México. Y más hoy, que llevan semanas reclamando por la desaparición de uno de sus líderes, Tomás Rojo, cuyo rostro y voz es símbolo de lo que se conoce como “guerra por el agua”. (Lea: Rodeada de fuentes hídricas, pero sin agua potable, la ironía del Amazonas)

Un acueducto, tres embalses y falta de agua potable son testimonio de una historia que ha arrinconado a este colectivo aborígen

de una historia que ha alimentado a este colectivo aborigen, compuesto de ocho pueblos del estado de Sonora, en el norte mexicano. El agua ha sido tan consustancial para su cultura y su existencia como la tierra, un nudo indisoluble que, desatado, es la brújula hacia la extinción.

El mencionado Tomás Rojo es vocero de la tribu e integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. “[Las obras] Han sido construidas sin el consentimiento de la población”, dijo a este cronista, semanas antes de su desaparición el jueves 27 de mayo luego de salir temprano a caminar en Vícam, su comunidad. El cociente de esa ecuación de infraestructura es cada vez menos agua para su pueblo y sus actividades económicas, entre las que se destaca la agricultura, por ser la más importante.

Historia de la injusticia hídrica

Entre los años '40 y los '60, el Gobierno mexicano construyó tres represas para riego y generación eléctrica en la zona. En antelación a esos planes, en 1937 les adjudicó unas 450.000 hectáreas y en 1940, la mitad del caudal del río Yaqui, el más importante de la región — una cuota de 250 millones de metros cúbicos al año.

Otro trago seco fue la construcción del Acueducto Independencia, inaugurado en 2013, con capacidad instalada de 75 millones de metros cúbicos. Este traslada el líquido desde la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, a unos 1.890 kilómetros al norte de Ciudad de México —un trasvase de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora—, para cubrir el crecimiento urbano e industrial.

A esa lista se suma el impacto de la crisis climática en la región, donde el agua disponible proviene de las lluvias estacionales.

“Ahora el problema es la sequía, hay un déficit de agua. El cambio climático sigue afectando. Tenemos que estar previendo esas situaciones, la disputa del agua, el efecto del cambio climático, las proyecciones deficitarias”, advirtió Rojo, cuya aparición con vida está siendo reclamada a viva voz en México.



Nuestras primicias en Google News

Al respecto, productores agrícolas del Valle del Yaqui afirmaron: “Es preocupante que, en el arranque del Plan de Justicia para los pueblos Yaquis, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya desaparecido una persona que siempre se preocupó por su pueblo y que su vida esté en peligro”.

Cóctel de amenazas

El conflicto por el agua en Sonora es un ingrediente del cóctel que amenaza a México, un país de unas 129 millones de personas altamente vulnerable a los efectos de la emergencia climática, como sequías, tormentas intensas, inundaciones, aumento de la temperatura y suba

del nivel del mar. A ello se suma una paradoja: mientras el sur y el sureste tienen agua en exceso, los habitantes del centro al norte se enfrentan a su insuficiencia.

Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación Sierra Nevada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), enumera los fenómenos que marcan el agua en el país: acaparamiento por empresas agrícolas, mineras, inmobiliarias, hoteleras, embotelladoras y cerveceras; contaminación, agudizamiento ante vulnerabilidad por sequías, inundaciones y sobreexplotación de acuíferos.

“La crisis del agua es parte de lo que vemos todos los días”, apunta.

Abasto del líquido a centros urbanos y áreas rurales remotas; deterioro de la calidad de ríos, lagos y embalses; mal manejo de aguas residuales; invisibilidad de la importancia de las aguas subterráneas; visión limitada de la gestión de cuencas; fallas de regulación del acceso a aguas superficiales y subterráneas fueron los hallazgos del estudio “Problemática y política del agua”, parte de la “Agenda Ambiental 2018” que un grupo de académicos entregó al entonces presidente electo López Obrador.

La adición de esas contrariedades resulta en conflictos, como el que viven los Yaquis en Sonora. (Le puede interesar: Preocupa que América Latina se la juegue por el extractivismo para su recuperación económica)

Esteban Castro, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), quien ha centrado parte de su trabajo en la situación hídrica de México, recuerda que este país latinoamericano ha sido pionero en identificar conflictos. En 1981, los había en 93 ciudades.

“Se sabía que se iban a agravar. Hay cosas que no han avanzado y que no se han resuelto, algunas graves. Hay conflictos entre usos rivales del agua: Ciudad de México extrae agua de varios estados y eso genera conflictos que siguen allí. Los intentos de regular la extracción han fracasado en el país. La mayor parte del agua se extrae de forma ilegal, de forma consentida. La gestión se ha vuelto más compleja”, explica.

La suma de esas dificultades interpone un obstáculo mayúsculo para que México logre la meta de agua limpia y saneamiento para toda la población, el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por Naciones Unidas en 2015 y que deben cumplirse para 2030.

Un país que se seca

México cuenta con una superficie de 1,96 millones de kilómetros cuadrados. De ellos, el 67% es árido y semiárido, y sólo el 33% restante, húmedo. La disparidad hídrica es un reflejo de su geografía.

En 2018, el agua renovable totalizó 451.585 millones de metros cúbicos —equivalentes a cubrir todo el país con 23 centímetros de agua. El 67% se da en el sur y sureste; el 33%, en el norte y noreste, según datos de la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A saber: el agua renovable es la cantidad máxima factible de explotar anualmente sin alterar el ecosistema y que equivale al aporte de la lluvia. De cada 100 litros de lluvia, 72 regresan a la

atmósfera por evotranspiración; 22 se escurren por ríos y arroyos; y 6 se infiltran en los 653 acuíferos, 108 de los cuales estaban sobreexplotados, 32 tenían suelos salinos o agua salobre y 18, intrusión de agua salada marina (por la suba del nivel del mar y su infiltración en los mantos freáticos).

Aunque su importancia ha sido invisibilizada, el agua subterránea es fundamental para México, que posee 757 cuencas hidrológicas, pues el 39% de los usos nacionales —excepto la hidroelectricidad— depende de ella.

En 2021, el país viene padeciendo una dura sequía que impacta severamente la agricultura, la ganadería y la disponibilidad de líquido para centros urbanos. A pesar del inicio de la temporada lluviosa en mayo, más de la mitad del territorio presenta condiciones secas.

Esas estadísticas transmiten una imagen más compleja. Si bien México tenía en 2017 un grado de presión nacional bajo (19,5%), su riesgo de estrés hídrico es alto, de acuerdo a la plataforma Aqueduct, elaborada por la Alianza Aqueduct, formada por gobiernos, empresas y fundaciones. De hecho, México es el segundo país de América en estrés hídrico, detrás de Chile.

El grado de presión sale de dividir el agua usada entre la renovable. Se considera “alto” si es mayor a 40% y “sin estrés” cuando es menor a 10%. En contraposición, el estrés aparece cuando la demanda excede la cantidad disponible. (Puede leer: Indígenas y comunidades locales son clave para proteger la biodiversidad, revela

estudio?)

Riesgo dispar

El territorio mexicano parece una paleta de colores. Del centro al norte pueden sufrir estrés hídrico en 2040. En tanto, la esquina noroccidental presenta riesgo medio-alto de empobrecimiento de acuíferos. Y prácticamente todo el Golfo de México y el Mar Caribe, riesgo medio-alto de sequía.

El país registra un uso intenso de agua, reflejado en su huella hídrica (el impacto de las actividades humanas sobre el recurso) de 1.978 m³/persona al año, cuando la media global es 1.385.

Para Patricia Ávila, académica del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un problema multidimensional.

“El agua es el reflejo de los problemas nacionales. La población más pobre tiene acceso diferente en términos de cantidad y calidad. Que haya cobertura no garantiza que tengan agua. Para la población rural, pobres urbanos y zonas indígenas, el acceso es muy limitado. Incluso en las ciudades no hay agua corriente todos los días”, explica.

A esos fenómenos, la experta añade el deterioro ambiental por la destrucción de bosques y la construcción de infraestructura, así como la contaminación del agua, al grado de que “muchas fuentes ya no son potables para garantizar condiciones adecuadas para la

poblacion”.

Datos de Oxfam indican que casi 10 millones de personas carecen de agua en sus hogares.

La situación de Ciudad de México, con más de 8 millones de habitantes, es particularmente delicada. Se encamina al llamado “Día Cero”, cuando se quedará sin recurso suficiente para satisfacer sus necesidades. Es el tercer de los 33 estados del país con mayor estrés hídrico, detrás de Baja California Sur (territorio árido) y Guanajuato (debido a las actividades agrícolas).

Escasez de dinero

A pesar de la problemática, el presupuesto de Conagua se ha achicado en al menos 50% entre 2015 y 2021. La provisión de agua potable absorbe la mayoría de esos fondos.

La austeridad impuesta por López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018, con tal de poder financiar megaproyectos como una refinería en la costa del Golfo de México y el Tren Maya que recorrerá cinco estados en el sur-sureste, ha hecho mella en el sector ambiental, incluido el ramo hídrico.

En 2019, su administración lanzó el “Programa Nacional Estratégico para el Conocimiento y Gestión de Cuencas de Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental”, con el fin de investigar soluciones a la gestión del líquido. De 47 proyectos elegidos, el Gobierno seleccionará un pequeño grupo para un trabajo de cinco años.

En la medida en que avanza el reloj climático hacia desastres de peores consecuencias, a México, como al mundo entero, tiempo no le sobra.

Para Omar Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, existe necesidad de avanzar hacia una perspectiva renovadora de la gestión del agua y de cuencas. “Hay un avance que no atiende de manera profunda y determinada los problemas, hay muchas simulaciones. Por ejemplo, hay propuestas de recuperación de ríos, pero no hay participación ciudadana. La visión se sigue basando en tubos, concreto y plantas de tratamiento”, cuestiona.

Tiempo de descuento

En una dimensión paralela, una nueva ley del sector está atorada en la Cámara de Diputados. Hasta ahora, esa institución ha recibido seis iniciativas, entre ellas la primera del país elaborada por organizaciones de defensa del derecho humano al agua, pueblos indígenas, productores agrícolas y académicos.

México incluyó el derecho humano al agua en su Constitución en 2012 y, por mandato legal, tenía un año para aprobar una nueva Ley de Aguas. Ese incumplimiento va por su séptimo año, como si arrancar hojas al calendario fuese ya un oficio.

El debate alrededor de esa nueva legislación refleja los conflictos por el recurso, pues mientras empresas y políticos abogan por mantener el estatus quo, otros grupos quieren una regulación que cambie la visión sobre su manejo.

Luego de siete años de foros y talleres, la iniciativa ciudadana se construyó sobre 12 consensos. Entre ellos: respetar el líquido de pueblos y comunidades; prohibir la entrega de agua para minería tóxica y fractura hidráulica (o fracking); acabar con el acaparamiento de concesiones; evitar la privatización de servicios hídricos; garantizar pleno acceso a la información y recursos públicos suficientes para el ramo.

Sin embargo, la ley no parece ser prioritaria para el Gobierno y el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y ha quedado a la expectativa de la recomposición del Congreso legislativo mexicano.

“Es necesario tener una ley de aguas que esté a la altura de lo que el país necesita”, plantea Moctezuma, académico de la UAM.

Para Castro, investigador de Conicet, la ley no lo es todo: primero se tiene que aplicar. “Esperamos que pase una ley en México que permita la gestión más democrática del agua. Si

se aprueba un proyecto progresista, ese logro será resultado de una lucha en relación con los conflictos. Pero, las injusticias no se van a resolver de un día para el otro”, resalta. (Lea también: Con el agua al cuello: la tragedia de los ríos que se desbordan)

El negocio de la escasez

El pueblo Yaqui espera algo más que una ley para tener agua suficiente. “Si los riesgos se concretan, prácticamente dejará al sur

de Sonora con gran déficit de agua y condenaría la existencia de la tribu. Tal vez tenga que pasar una generación que sufra los estragos más amargos, pues la proyección a 2030 para la cuenca del Yaqui es un déficit de 270 millones de metros cúbicos. Si se agrega las extracciones ilegales, va a ser más crítico. Hacen del agua una mercancía muy cara en Sonora, la escasez es negocio de especuladores”, lamentó Rojo.

La comunidad y el Gobierno ya firmaron un acuerdo para la construcción de un acueducto, planta potabilizadora y alcantarillado, así como la transferencia de la gestión de un distrito de riego por unas 23.000 hectáreas que han gestionado de facto desde años.

Si bien Ávila conserva la esperanza de que las investigaciones en marcha ayuden a resolver los problemas, guarda reservas similares sobre la postura gubernamental.

“No estamos seguros si al Gobierno le interesa hacer los cambios necesarios o si va a poder hacerlos. No veo cambios, no veo una visión diferente. No han internalizado el cambio climático en las medidas”, sostiene, y propone una reconversión agrícola a partir del faltante de líquido y diversificación de fuentes, como la captura de agua de lluvia.

Solo una cosa parece cierta. La crisis climática hará más cuesta arriba que haya recurso para todos.

** Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por*